

La situación política de la Región de Murcia (2003-2006)

Antonio Campillo

En el *Informe 2003*, tras analizar el funcionamiento del sistema político murciano, llegábamos a la conclusión de que la Región de Murcia sufre un grave déficit democrático, debido a cuatro factores principales: el efecto monopolístico de las sucesivas mayorías absolutas en la Asamblea Regional (favorecido por una ley electoral que no respeta el principio de proporcionalidad y el pluralismo real de la sociedad murciana), el bloqueo de los cauces institucionales de participación ciudadana (tanto en el ámbito autonómico como municipal), la escasa cultura política de la ciudadanía murciana (puesta de manifiesto en las sucesivas encuestas del CIS) y el control ejercido sobre la mayoría de los medios de comunicación regionales por la conservadora burguesía murciana (en la que convergen, hasta el punto de confundirse, el poder político, el económico, el financiero y el eclesiástico).

En el presente capítulo, vamos a analizar el periodo transcurrido entre 2003 y 2006. Nos centraremos en aquellos acontecimientos que han supuesto una novedad relevante, sea porque han agravado la situación de déficit democrático, sea porque constituyen un contrapunto a dicha situación y tal vez pueden acabar provocando un cambio de tendencia.

1. LOS RESULTADOS ELECTORALES DE 2003 Y 2004

1.1. Las elecciones autonómicas y municipales de 2003: resultados en la Región Murcia

Desde 1995, el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta en la Región de Murcia y en la mayor parte de los municipios de la Región, comenzando por los dos más poblados: Murcia y Cartagena. En las dos últimas elecciones autonómicas y municipales (1999 y 2003), su ventaja con respecto a los otros dos partidos con representación en la Asamblea Regional (PSRM-PSOE e IURM) ha ido en aumento. Véase los cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. Resultados de las elecciones autonómicas en la Región de Murcia, 1995, 1999 y 2003

Partidos	2003			1999			1995		
	Votos	%	Escaños	Votos	%	Escaños	Votos	%	Escaños
PP	366.314	56,76	28	323.446	53,62	26	330.089	52,94	26
PSOE	219.707	34,04	16	219.798	36,44	18	200.133	32,10	15
IURM	36.551	5,66	1	42.839	7,10	1	78.664	12,62	4
LVRM	9.988	1,55	0						
CCSE	1.162	0,18	0						
PH	1.039	0,16	0						
PFyV	374	0,06	0						
DN-PNT	227	0,04	0						
CDS	126	0,02	0						
LV				5.683	0,94	0			
PADE				5.527	0,92	0			
UC-CDS				1.845	0,31	0	4.339	0,70	0
PIMM-MIV				1.579	0,26	0			
UPM				1.502	0,25	0			
CCS				844	0,14	0	3.531	0,57	0
PNT				168	0,03	0			
PMR							2.405	0,39	0
BD							1.591	0,26	0
CEDI							1.447	0,23	0
NR							1.325	0,21	0

Fuente: www.carm.es/chac/dgep/econet/sicrem/elecciones**Cuadro 2.** Participación y votos obtenidos (en %) por los principales partidos políticos en las elecciones municipales. Región de Murcia

Región de Murcia	1979	1983	1987	1991	1995	1999	2003
Participación	65,0	68,8	72,4	67,3	75,5	68,2	73,4
Votos							
PSRM-PSOE	39,0	50,5	42,0	44,6	31,6	35,6	34,6
PP	3,9	32,7	27,4	32,0	49,7	49,4	52,8
IURM	10,4	6,8	7,4	9,7	11,8	7,5	6,5
CDS-UC	36,5	1,0	11,9	5,4	0,6	0,2	0,0
Otros	7,4	6,5	7,9	6,8	4,5	5,6	4,2

Fuente: www.carm.es/chac/dgep/econet/sicrem/elecciones

Es cierto que el PSRM-PSOE aumentó su porcentaje de voto en más de 4 puntos en 1999, pero lo hizo a costa de IURM, no a costa del PP. De hecho, la suma de PSRM-PSOE y IURM supuso una pérdida de 1,18% y un aumento del diferencial con el PP, que pasó de 8,22 puntos en 1995 a 9,14 en 1999, aunque mantuvo el mismo número de escaños.

En mayo de 2003, se celebraron las últimas elecciones autonómicas y municipales. En las autonómicas, el PP obtuvo el 56,76% del total y ganó dos escaños; el PSRM-PSOE obtuvo casi los mismos votos que en 1999, pero su porcentaje bajó al 34,04% y perdió dos escaños; IURM obtuvo el 5,66% y siguió teniendo un escaño; Los Verdes (LVRM), que en 1995 se habían presentado en coalición con IURM, se presentaron por separado (como en 1999) y obtuvieron el 1,55% y ningún escaño; este 1,55% del LVRM fue ligeramente superior al 1,44% que perdió IURM, de modo que se produjo un trasvase de votos de uno a otro partido, sin ningún beneficio en escaños. Al contrario, esta fragmentación de opciones políticas perjudicó al conjunto de la izquierda murciana y le hizo perder dos escaños al PSRM-PSOE, en parte por el ascenso del PP y en parte por el efecto mayoritario de la ley electoral (que beneficia al partido más votado). La suma de PSRM-PSOE, IURM y LVRM supuso un retroceso al 41,25% y un nuevo aumento del diferencial con el PP, que pasó de 9,14 puntos en 1999 a 15,51 en 2003.

Si se mantuviera esta tendencia, el PP podría llegar a doblar en votos a su más inmediato adversario, el PSRM-PSOE, en las autonómicas de 2007. Además, en las elecciones municipales, celebradas al mismo tiempo que las autonómicas, el PP también incrementó su ventaja con respecto al PSRM-PSOE en casi todos los municipios, arrebató varios de ellos a la izquierda y borró a IURM del ayuntamiento de Murcia. Con estos resultados autonómicos y municipales, la Región de Murcia es desde el pasado 2003 la comunidad autónoma políticamente más conservadora de toda España.

1.2. Las elecciones generales de 2004: resultados en el conjunto de España

Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 provocaron un vuelco político en España, poniendo fin a ocho años de gobierno del PP y permitiendo al PSOE hacerse de nuevo con la mayoría suficiente para gobernar en solitario. La pérdida de la mayoría absoluta por parte del PP parecía bastante probable, sobre todo tras el resultado de las elecciones municipales de 2003 (que en el conjunto de España dieron mayoría de votos al PSOE) y tras la victoria del tripartito PSC-ERC-ICV en Cataluña (que abrió un nuevo ciclo político en esta comunidad, gobernada por CiU desde la transición). Pero, tras la victoria del PP en la comunidad de Madrid, en segunda convocatoria electoral (pues en la primera ganó la suma de PSOE e IU, pero esta victoria de la izquierda se vio truncada por la ausencia en la investidura de dos diputados socialistas tránsfugas, vinculados a la trama urbanística madrileña), y tras la dimisión de Carod Rovira, dirigente de ERC, como Conseller en Cap de la Generalitat catalana (por su entrevista con ETA), nadie esperaba que el PSOE obtuviera en el Congreso 16 diputados más que el PP y se quedara a solo 12 de la mayoría absoluta.

El atentado terrorista del 11-M y el modo en que fue utilizado por Aznar para intentar engañar al país y al resto del mundo, atribuyendo la autoría a ETA, fueron sin duda un acicate para el aumento de la participación electoral y para el voto de castigo contra el PP, acentuando así una voluntad de cambio político que se había ido extendiendo en los dos años precedentes (al menos, desde la huelga general del 20 de junio de 2002, la catástrofe del *Prestige* y la masiva oposición del pueblo español a la invasión de Iraq), y que ya se reflejaba en las encuestas preelectorales.

La derrota del PP fue rotunda e inequívoca, y además se produjo con una participación de casi nueve puntos por encima de las anteriores elecciones generales. El PP pasó directamente de la mayoría absoluta a la oposición, cosa que no había ocurrido en toda la historia de la democracia española. Esto indica que el rechazo hacia el Gobierno de Aznar, y en especial hacia su política autoritaria, belicista, manipuladora y cínica, fue muy firme y muy claro por parte del electorado español.

Fue igualmente notable el éxito que Zapatero consiguió para el PSOE: casi 11 millones de votos, 3 más que en las elecciones anteriores. Esta victoria le proporcionó una gran legitimidad, a pesar del empeño que los invasores de Iraq pusieron en negarle esa legitimidad: tanto el Gobierno de Bush, con su insultante teoría de que los españoles habían cedido al chantaje del terrorismo islámico, como el PP y los medios de comunicación afines, con su delirante teoría conspirativa en torno al 11-M.

Con la victoria del 14-M, Zapatero ganó una gran autoridad moral no sólo dentro de su partido sino también ante el conjunto de las fuerzas políticas parlamentarias, ante la opinión pública española y ante los demás gobiernos extranjeros, comenzando por la Unión Europea. Gracias a esa autoridad moral, le fue más fácil cumplir algunos de sus compromisos electorales, como la retirada de las tropas españolas en Iraq, la reforma de los estatutos autonómicos, la regularización de casi seiscientos mil inmigrantes, la ampliación de derechos y prestaciones a diversos colectivos sociales (mujeres, homosexuales, personas dependientes, etc.), las reformas educativas, la derogación del previsto trasvase Ebro-Segura y su sustitución por un amplio programa de desalación, etc.

Pero hay también otros compromisos que el Gobierno del PSOE no ha podido cumplir o bien lo ha hecho de forma muy insuficiente (por ejemplo, poner freno al urbanismo especulativo y al brutal encarecimiento de la vivienda, revisar la financiación de los partidos y de los municipios, revisar las relaciones con la Iglesia Católica, reformar la Constitución y recuperar la Memoria Histórica republicana y antifranquista), en parte por sus propias contradicciones internas y en parte porque su victoria electoral se vio limitada desde el principio por tres importantes correctivos.

En primer lugar, Zapatero y el PSOE atrajeron mucho voto útil procedente de IU, Los Verdes, los desengañados abstencionistas de izquierdas y los jóvenes que votaban por vez primera, porque el objetivo prioritario de todos ellos era derrotar sin paliativos al PP y apoyar un gran cambio político en España. Esto perjudicó de forma muy grave e injusta a IU, castigada ya por una ley electoral que beneficia desproporcionadamente a los partidos mayoritarios y a los que concentran su voto en unas pocas circunscripciones, como los nacionalistas. Desde el primer momento, Zapatero reconoció este hecho, pues sabía que muchos de esos votos de la izquierda más crítica podía perderlos con la misma facilidad con que los había ganado. Recuérdese el famoso “no nos falles” que los jóvenes le exigieron en la noche electoral. En parte por eso (y no solo por eso, sino también por otros dos motivos: por convicción propia y porque no cuenta con mayoría absoluta) buscó la colaboración y el apoyo de Gaspar Llamazares y Joan Herrera. De hecho, el apoyo crítico que el Gobierno del PSOE ha estado recibiendo del grupo parlamentario Izquierda Verde (IU-ICV), al que hay que sumar el de una fortalecida Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), es una novedad en la historia de la democracia española. En la práctica, la alianza PSOE-IV-ERC ha hecho posible el primer Gobierno de “frente popular” desde la época de la II República. Pero esta colaboración ha tenido también sus límites, como se ha mostrado precisamente en el tema de la Memoria Histórica y en algunos otros asuntos (el referéndum sobre la Constitución europea, la reforma del Estatuto catalán, las relaciones con la Iglesia Católica, la política fiscal, etc.), en los que se ha producido un claro desencuentro entre los aliados de la izquierda plural española.

El segundo correctivo, ya apuntado, es que Zapatero no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, por lo que tiene que contar con el apoyo de otras fuerzas políticas para gobernar: no

solo Izquierda Verde (IU-ICV) sino también los partidos nacionalistas (CiU, ERC, PNV, CC, BNG, ChA, EA, NaBai). Este segundo apoyo le ha obligado a afrontar el diálogo territorial y la reforma estatutaria en unas condiciones muy difíciles, dada la capacidad de bloqueo con que cuentan los partidos nacionalistas, como ha podido comprobarse en la ya citada reforma del Estatuto catalán, que le supuso al Gobierno de Zapatero el primer desgaste serio (aunque transitorio) de la legislatura, un desgaste lógicamente azuzado por el PP, con su discurso sobre la ruptura de la unidad de España. Y si Zapatero pudo salir del paso es porque aprovechó la rivalidad entre ERC y CiU para no depender en exclusiva de ninguno de los dos partidos catalanistas. También ha jugado y juega a su favor el hecho de que el PP de Rajoy, Acebes y Zaplana, resentido por la derrota electoral tras el 11-M, está haciendo una oposición furibunda e irresponsable, lo cual ha forzado al resto de los partidos a acudir en apoyo del Gobierno. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Estatuto catalán, en la investigación sobre el 11-M y en el proceso de paz que se ha abierto tras la declaración de alto el fuego permanente hecha pública por ETA.

El tercer correctivo tiene que ver, precisamente, con la oposición de extrema derecha que está llevando a cabo el PP, en connivencia con la jerarquía católica y con determinados medios de comunicación, como *El Mundo* y la COPE. Es cierto que este tipo de oposición por parte del PP ha llevado al resto de los partidos a formar un frente común de apoyo al Gobierno de Zapatero, pero también es cierto que está bloqueando o limitando la acción del Gobierno en aquellos asuntos de Estado que requerirían acuerdos ampliamente mayoritarios, como la política exterior, la reforma de la Constitución, la negociación con ETA, el fenómeno de la inmigración, la reforma de la educación, la financiación de la Iglesia Católica, la política hidrológica, la política urbanística, la financiación de los ayuntamientos y de los partidos, etc. Además, el PP se sirve de las comunidades autónomas en las que gobierna, sobre todo las de Madrid, Valencia y Murcia, para obstaculizar todas aquellas políticas que requieren del consenso entre todas las comunidades autónomas.

1.3. Las elecciones generales de 2004: resultados en la Región de Murcia

Me he detenido a analizar la actual situación política de España, derivada de las últimas elecciones generales, porque sin ella no podríamos entender algunos de los cambios que han tenido lugar en nuestra Región desde el 14-M. Así, por ejemplo, la victoria del tripartito en Cataluña y el posterior apoyo de Izquierda Verde y ERC al Gobierno de Zapatero hicieron posible la modificación del PHN y la suspensión del proyectado trasvase Ebro-Segura, que había sido la gran promesa de Aznar a las dos comunidades gobernadas por el PP: la valenciana y la murciana.

Las elecciones generales del 14-M provocaron un vuelco político en España, poniendo fin a ocho años de gobierno del PP y permitiendo al PSOE hacerse de nuevo con la mayoría suficiente para gobernar en solitario, con el apoyo parlamentario de Izquierda Verde (IU-ICV), ERC y otros grupos nacionalistas. El PSOE subió y el PP bajó en casi todas las comunidades españolas, excepto en la murciana. En total, el PSOE obtuvo casi 11 millones de votos, 3 más que en las elecciones anteriores, y consiguió en el Congreso 16 diputados más que el PP, hasta quedarse a sólo 12 de la mayoría absoluta. Pero este cambio de ciclo político no tuvo lugar en la Región de Murcia, sino todo lo contrario. La Región de Murcia fue la única comunidad española donde el PP subió (casi un punto). A pesar de que el PSOE también subió (casi un punto), el PP no sólo conservó su ventaja sobre el PSOE (22,5 puntos), sino que lo dobló en escaños (6 contra 3) y lo superó en votos en 41 de los 45 municipios de la Región, obteniendo el 57,5% del total regional, frente al 35% del PSOE. A la vista de estos datos, y tras las elecciones autonómicas de Galicia (que supusieron

la derrota del PP de Fraga y abrieron la vía a un gobierno de coalición entre el PSG-PSOE y el BNG), hemos de concluir de nuevo que la Región de Murcia se ha convertido en la comunidad políticamente más conservadora de toda España.

Parecía que en las elecciones generales del 14-M iba a producirse un ligero retroceso del PP en nuestra Región, en consonancia con el clima general de cambio político, pero no fue así. El PP perdió escaños en casi todas las autonomías, incluso en las que gobernaba con mayoría absoluta, como Galicia o el País Valenciano, pero las ciudades de Ceuta y Melilla y la comunidad autónoma murciana fueron la excepción a la regla.

Aunque los murcianos, como el resto de los españoles, se manifestaron masivamente contra la guerra de Iraq, y aunque el 14-M estaban convocados para elegir al nuevo Gobierno de España, lo cierto es que no castigaron con su voto la política belicista y manipuladora del Gobierno de Aznar. En la Región de Murcia no tuvo el más mínimo efecto electoral la huelga del 20-J, ni la catástrofe del *Prestige*, ni la invasión de Iraq, ni las mentiras del 11-M. Esto indica hasta qué punto la Región de Murcia constituye una excepción política en el conjunto de la democracia española y cuánto es el trabajo que le queda por hacer a la izquierda murciana, si quiere que en esta Región se produzca también un cambio de ciclo político.

La excepcionalidad política murciana responde a causas muy diversas, pero el aglutinante de todas ellas ha sido una estrategia de propaganda masiva y sistemática basada en la demanda de trasvases de agua desde otras regiones españolas, una estrategia que ya en el *Informe 2003* definimos como “nacionalismo hidráulico”.

2. LAS CAUSAS DE LA EXCEPCIONALIDAD POLÍTICA MURCIANA

En un documento titulado *La situación política de la Región* y fechado el 15 mayo de 2004, el Foro Ciudadano de la Región de Murcia llevó a cabo un análisis de la situación creada en la Región tras las elecciones generales del 14-M. En ese documento, se trataba de explicar “el profundo conservadurismo de la Región de Murcia y su excepcionalidad política en el cambio de ciclo que se ha iniciado tras el 14 de marzo de 2004”. Según el análisis del Foro Ciudadano, hay que distinguir tres tipos de causas: 1) la secular tradición rural, caciquil y clientelar de la sociedad murciana; 2) la exitosa invención del “nacionalismo hidráulico” por parte del PP regional; 3) las debilidades y errores del conjunto de la izquierda murciana, y en especial del principal partido de la oposición, el PSRM-PSOE, que gobernó la Región hasta 1995 y defenestró uno tras otro a sus propios presidentes.

2.1. De campesino a ciudadano

En primer lugar, hay toda una serie de razones históricas que explican la falta de una cultura política democrática con arraigo sólido en la sociedad civil murciana. Tradicionalmente, la Región de Murcia ha estado dominada por un reducido grupo de familias terratenientes y aguatenientes, que vivían de las rentas explotando sus grandes propiedades en régimen de arrendamiento o aparcería. La mayoría de la población —arrendatarios, aparceros y jornaleros— dependía directa o indirectamente de la agricultura y vivía dispersa en zonas rurales o en pequeñas pedanías sin ayuntamiento propio, dada la enorme extensión de los municipios murcianos y la escasez de núcleos urbanos. La clase media urbana e ilustrada era muy reducida. Muchos jornaleros sin propiedades ni empleo se veían condenados a emigrar. Había unas tasas de analfabetismo adulto muy

altas, una cultura cívica muy escasa, una identidad regional prácticamente nula y una vertebración social dominada por el clericalismo católico y el clientelismo caciquil. Para este tema, remitimos a la excelente introducción histórica de María Teresa Pérez Picazo, catedrática emérita de la Universidad de Murcia, con la que se inicia el presente *Informe 2006*: “De campesino a ciudadano: la difícil penetración de la ciudadanía activa en la sociedad murciana”.

Aunque se han producido muchos cambios desde la aprobación de la Constitución (1978), la creación de la Comunidad Autónoma (1982) y el ingreso en la Unión Europea (1986), el peso del pasado sigue siendo muy fuerte, no sólo en el terreno de las tradiciones folclóricas y religiosas, que han sido reavivadas en los últimos años, sino también en el comportamiento caciquil que sigue predominando en una gran parte de la clase política y empresarial de la Región. Esta herencia histórica explica que, tras veinte años de autonomía, no se haya consolidado entre los murcianos un claro sentimiento de pertenencia a una comunidad política regional, ni una participación informada y activa en los asuntos públicos. Según los datos del CIS, los ámbitos privilegiados de identificación siguen siendo la pequeña localidad y la nación española en su conjunto. En cuanto al grado de información y participación en los asuntos públicos, que es un indicador fundamental de cultura democrática, los datos del CIS muestran que también en esto los murcianos se encuentran muy por debajo de la media española.

Dada esta escasa conciencia autonómica y esta falta de cultura democrática, no es de extrañar que los sucesivos gobiernos de la Región hayan sido, de 1983 a 2004, del mismo signo político que los gobiernos centrales: sucedió primero con el PSOE (que gobernó en España de 1982 a 1996 y en Murcia de 1983 a 1995) y ha sucedido después con el PP (que gobernó en España de 1996 a 2004 y sigue haciéndolo en Murcia desde 1995). Ni es de extrañar que uno y otro partido hayan gobernado siempre con una holgada mayoría absoluta y hayan promovido un régimen de partido casi-único cuya principal finalidad es perpetuarse a sí mismo. Sin embargo, este régimen de partido casi-único se ha consolidado desde que el gobierno regional y gran parte de los gobiernos municipales están en manos del PP, hasta el punto de convertir a la Región de Murcia, como ya he dicho antes, en la comunidad más conservadora de toda España.

2.2. El nacionalismo hidráulico

Esto nos lleva a la segunda de las causas que explican la excepcionalidad política murciana: la exitosa estrategia puesta en marcha por el PP desde que en 1995 obtuvo el gobierno de la Región y de la mayoría de sus ayuntamientos, comenzando por Murcia y Cartagena.

En la última década, la estructura económica y social de la Región se ha visto profundamente transformada. Ha cambiado la distribución de la propiedad y han cambiado también los usos del suelo y del agua: en un primer momento, y gracias al trasvase del Tajo, se multiplicaron las grandes plantaciones horto-frutícolas bajo plástico (con los sectores asociados del envasado y la exportación) en antiguas zonas de secano, mientras que las pequeñas explotaciones de la huerta tradicional se iban abandonando y recalificando como suelo urbanizable; más recientemente, no solo en la huerta tradicional sino también en los nuevos regadíos e incluso en espacios naturales protegidos, se han multiplicado las grandes promociones y construcciones urbanísticas (con los sectores asociados del turismo y la hostelería), en las que participan tanto empresas locales y regionales como nacionales y multinacionales. Pero todo ello se ha producido mediante un crecimiento insostenible de la demanda de agua, es decir, mediante aportes hídricos extraordinarios, unos procedentes del Tajo y otros de la sobreexplotación y salinización de los acuíferos de la propia Cuenca del Segura. El resultado ha sido la formación de una nueva oligarquía de terratenientes y aguatenientes que acaparan la mayor parte del suelo y del agua, que explotan los recursos naturales

como un simple negocio, sin la menor preocupación conservacionista y sin el menor apego a los valores históricos y culturales de los entornos rurales y urbanos. Pero esa nueva oligarquía, como la antigua, sigue presentando la defensa de sus intereses de casta como si fuesen los “intereses generales” de todos los murcianos, y sigue chantajeando y amenazando a quienes pretenden poner en cuestión su hegemonía económica, política, social y cultural.

Este nuevo modelo de desarrollo intensivo y extensivo de las plantaciones horto-frutícolas y las construcciones urbano-turísticas ha generado crecimiento económico y empleo a corto plazo, pero al mismo tiempo ha provocado un expolio sin precedentes del patrimonio natural y cultural de la Región, y se ha sustentado sobre la explotación masiva de una mano de obra precaria, irregular y con bajos salarios, mayoritaria entre los jóvenes, las mujeres, los obreros poco cualificados y los inmigrantes extracomunitarios (que superan ya el 11% de la población regional y el 20% de la población empleada). Como he dicho antes, este modelo de desarrollo requiere una demanda creciente de aportes hídricos extraordinarios, sea reclamándolos a otras cuencas, sea extrayéndolos abusivamente del subsuelo, en un contexto de cambio climático y de nueva cultura hidrológica que hace cada vez más problemática la política de trasvases entre cuencas y más injustificable la multiplicación incontrolada de pozos ilegales. La alternativa de las desaladoras puede servir para garantizar el consumo humano, pero sigue siendo imprescindible promover una “nueva cultura del agua”, acorde con las directivas europeas y basada no en el incremento ilimitado de la oferta sino en la gestión y contención de la demanda.

Según el estudio *Países ricos, pobres en agua*, presentado por WWF/Adena en la Semana Mundial del Agua (20 a 26 de agosto de 2006), España es el país que más agua consume de toda Europa y el que cuenta con la gestión hídrica más desastrosa de todo el mundo desarrollado, a pesar de ser uno de los cinco países con más presas (1.200 embalses de gran capacidad). Según una encuesta del INE referida a 2004, el 21% del agua se pierde en las deficientes redes de distribución españolas, y ese porcentaje aumenta al 24% en la Región de Murcia, nada menos que 28,4 millones de metros cúbicos al año, casi la misma cantidad que utilizan todas las empresas de la Región (30,3 millones).

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas españolas que ha demostrado un mayor desprecio hacia su propio patrimonio natural y cultural, hasta el punto de convertir casi todo su territorio, en el interior y en el litoral (incluidas las 15.000 hectáreas de espacios naturales desprotegidas por la Ley regional del Suelo), primero en suelo regable y después en solar urbanizable. Según un estudio del Observatorio de la Sostenibilidad sobre los cambios en la ocupación del suelo en España, realizado mediante fotos tomadas por satélite y publicado en junio de 2006, el regadío ha crecido en la Región de Murcia un 23,4% en el periodo comprendido entre 1987 y 2000, a pesar de que los nuevos regadíos están prohibidos y a pesar de que el PP y los regantes han venido reclamando al resto de España “solidaridad” y “trasvases” (del Tajo y del Ebro) para saciar la sed de los regadíos murcianos “legales”. En el mismo periodo 1987-2000, el suelo construido ha crecido en la Región un 62%, más del doble de la media nacional. A estos datos hay que añadir el *tsunami* de recalificaciones y promociones urbanísticas que ha tenido lugar entre 2001 y 2006.

El crecimiento incontrolado de los regadíos ilegales y de las construcciones urbano-turísticas no solo se ha basado en el expolio masivo de los recursos hídricos y naturales, sino también en la explotación y precarización de la mano de obra: la Región de Murcia ha sido en 2005 una de las comunidades españolas con la tasa de temporalidad laboral más alta: nada menos que el 41,5%, mientras que la media española fue del 33,3% (la más alta, a su vez, de la Unión Europea). Además, sigue siendo la región española con las tasas más altas de economía sumergida: según un estudio del Consejo Económico y Social (CES), dirigido por José Colino Sueiras (profesor de Economía de la UMU y colaborador del *Informe 2003*), a pesar de que el porcentaje de trabaja-

dores que no están dados de alta en la Seguridad Social ha descendido 10 puntos desde 1995, en 2005 el 22% seguía sin cotizar (porcentaje que subía al 80% entre los pluriempleados, que eran el 14% de los encuestados); además, entre 1995 y 2005, el porcentaje de trabajadores que hace horas extras sin cobrarlas ha pasado del 25% al 32,5%, y el de quienes trabajan una jornada superior a la legal ha pasado del 18,1% al 21,5%; finalmente, los trabajadores que cobran salarios fuera de nómina eran el 18,3% en 1995 y han pasado al 24,3 en 2005.

Nuestra Región sigue siendo una de las comunidades españolas con las rentas familiares más bajas y con las tasas más altas de economía sumergida, discriminación laboral de la mujer, empleo precario y poco cualificado, inmigrantes extracomunitarios explotados y segregados, abandono escolar prematuro por parte de los jóvenes, encarecimiento del precio de la vivienda y retraso en la edad de emancipación juvenil. Por todo ello, el actual modelo de desarrollo resulta insostenible a medio y largo plazo, desde todos los puntos de vista: económico, social y medioambiental.

En el *Informe 2003* decíamos que la economía murciana es una economía depredadora de recursos naturales y humanos, por lo que resulta a un tiempo insostenible e insolidaria. En aquel estudio se puso de manifiesto que la Región de Murcia, a pesar de contar con una de las tasas de crecimiento económico y de empleo más altas de España, sigue ocupando el furgón de cola en la mayor parte de los indicadores de desarrollo humano: condiciones laborales, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, vivienda, urbanismo sostenible, transportes públicos, energías renovables, protección del patrimonio natural y cultural, pluralismo político e informativo, participación ciudadana, etc. Tres años después, este diagnóstico se ha visto confirmado y en muchos aspectos agravado, como revelan los datos recogidos en el presente *Informe 2006*.

La razón de este agravamiento es muy sencilla: la prioridad del PP, tanto en el gobierno regional como en los gobiernos locales, no ha consistido en fortalecer los recursos y servicios públicos para mejorar el bienestar social de la población, sino todo lo contrario, su mayor empeño ha consistido en debilitar y descapitalizar a la administración pública, vender una gran parte de su patrimonio, infrautilizar y penalizar a sus funcionarios más cualificados, privatizar o “externalizar” las políticas públicas más básicas (vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, comunicación, etc.), y beneficiar “sin complejos” a los sectores católicos más conservadores y a las empresas privadas “amigas” o “emparentadas” con los propios dirigentes políticos, a las que se ha transferido no solo la iniciativa de gestión (urbanizadora, educadora, sanitaria, asistencial, cultural, informativa, etc.), sino también cuantiosas subvenciones a fondo perdido e incluso la propiedad del suelo público. El resultado ha sido un deterioro generalizado de todos los servicios y políticas públicas. Pero, ¿por qué no han reaccionado los ciudadanos ante semejante expolio de los bienes públicos?

Porque, junto a la prioridad de descapitalizar y privatizar los recursos y servicios públicos, la otra gran prioridad del PP ha consistido en dedicar ingentes y opacas cantidades del dinero público a la compra de voluntades (mediante el uso discrecional de las subvenciones) y a una masiva y sistemática política de propaganda (una vez más, mediante el uso de las subvenciones y la publicidad pagada), que le ha permitido controlar a casi todos los medios de comunicación escritos y audiovisuales, y que ha girado de forma simplista y repetitiva en torno al “agua para todos”.

Es importante tener en cuenta la estrecha relación, aparentemente contradictoria, entre la privatización de las políticas y servicios públicos, la distribución clientelar del patrimonio y el dinero de todos, y la estrategia propagandística y machacona del “agua para todos”. Solo así podremos comprender las peculiaridades de la situación política regional.

En efecto, ante la contradicción entre el alto crecimiento económico y el bajo desarrollo social, medioambiental, cultural y político, es inevitable hacerse unas cuantas preguntas: ¿Quiénes son los responsables políticos de esta injustificable situación, habida cuenta de que el PP gobier-

na en la Región de Murcia y en la mayoría de sus ayuntamientos desde 1995? ¿A qué bolsillos han ido a parar los elevados beneficios económicos generados, puesto que no se han destinado a procurar un desarrollo más equitativo y sostenible de la Región? ¿Cómo se explica que el PP haya conseguido imponer este modelo de desarrollo, basado en el expolio masivo de los recursos naturales y culturales, y en la explotación y discriminación social de los jóvenes, las mujeres, los trabajadores no cualificados y los inmigrantes extracomunitarios? ¿Por qué los murcianos no han castigado al gobierno regional y a los gobiernos locales del PP, pese a su manifiesta incapacidad para mejorar el desarrollo humano y el bienestar social de la Región, sino que, por el contrario, les han dado un apoyo creciente en las sucesivas convocatorias electorales? ¿Por qué la comunidad murciana ha sido la única en la que el PP no ha disminuido sino que ha aumentado su porcentaje de votos en las elecciones del 14-M? ¿Cómo explicar esta excepción política en un país que ha optado mayoritariamente por un gobierno progresista y que reclama mayores avances en políticas sociales, medioambientales, de pluralismo informativo y de profundización democrática?

En un artículo firmado por veintiocho miembros del Foro Ciudadano y publicado en el diario *La Verdad*, el 18 de julio de 2005, con el título “El nacionalismo hidráulico”, los autores tratábamos de responder a estas preguntas. A continuación, reproduzco algunos extractos del artículo:

Sin lugar a dudas, el gran éxito del PP murciano ha consistido en crear un nuevo mito político, una nueva bandera con la que ocultar su incompetencia y acallar toda posible crítica: el “nacionalismo hidráulico”. Conviene recordar que en 1990 el llamado “problema del agua” era la mayor preocupación sólo para el 0,4% de los ciudadanos de la Región, según un estudio del Departamento de Sociología de la UMU. El “nacionalismo hidráulico” ha sido, pues, una invención reciente y exitosa.

A diferencia de otras comunidades autónomas, la Región de Murcia no cuenta con ningún partido nacionalista, ni se había dotado hasta ahora de una imaginaria “identidad nacional”, ni se había afirmado frente a otras comunidades como un “nosotros” unitario y excluyente. Sin embargo, desde 1995, ha sido el PP, el partido supuestamente garante de la unidad de España, el que ha conseguido crear de la nada un sentimiento patriótico de “murcianía” que, como todos los sentimientos patrióticos, se manifiesta políticamente de forma fanática, exaltada y agresiva. Pero este nuevo sentimiento se asienta sobre una “seña de identidad” muy peculiar: el agua, convertida en el gran tótem comunitario de los murcianos mediante la simple y reiterada consigna del “agua para todos”.

El nacionalismo hidráulico, como todo nacionalismo, se apoya en tres mentiras básicas, que repite machaconamente hasta convertirlas en dogmas de fe. En primer lugar, el victimismo: la culpa de nuestros males es siempre de “los otros”, de los forasteros, de quienes nos agreden o nos arrebatan lo que es nuestro, en este caso de los catalanes, aragoneses y manchegos, porque no nos quieren dar un agua que reclamamos como nuestra y sobre la que creemos tener una especie de “derecho histórico”. En segundo lugar, el narcisismo: tenemos un “derecho” inalienable a ese agua que corre por el Tajo, el Ebro o cualquier otro río que se nos antoje reclamar, porque “somos mejores que los demás”, porque “aprovechamos el agua mejor que ellos”, porque nuestros productos horto-frutícolas y nuestras construcciones urbano-turísticas son más rentables que las de esas otras comunidades que “desperdician el agua y la tiran al mar”. En tercer lugar, la unanimidad: tras la pancarta del “agua para todos”, que ha vuelto a salir a la calle el 14 de julio, “estamos unidos todos los murcianos”, gobierno y oposición, empresarios y sindicatos, constructores y agricultores, cajas de ahorro y

medios de comunicación, peñas huertanas y cofradías de moros y cristianos, y quien no se sume al coro unánime ya no es “uno de los nuestros”, sino un “traidor”, un “enemigo interior”, un “antimurciano”, un infiltrado al servicio de “los otros”, y por tanto hemos de insultarlo, acallararlo, condenarlo a la muerte civil y conseguir así la “limpieza étnica” y la unanimidad proclamada.

Este nacionalismo hidráulico ha permitido al PP murciano eludir toda responsabilidad en el ejercicio de su gestión durante los últimos diez años, al desplazar hacia uno o varios enemigos exteriores todos los conflictos internos. Por ejemplo, el conflicto entre agricultores y constructores, ya que estos últimos están incrementando incontroladamente la demanda de agua a costa de aquellos, y al mismo tiempo los están utilizando como punta de lanza contra el gobierno central y las comunidades “insolidarias”. ¿Por qué lo consienten los agricultores? Quizá porque muchos de ellos se han convertido de la noche a la mañana en propietarios de solares, gracias a la política de recalificaciones masivas promovida por el gobierno regional y ejecutada por los gobiernos locales. De modo que el conflicto entre el regadío y la especulación inmobiliaria se transforma en una complicidad de intereses amparada por los gobernantes regionales y municipales, y en la que la legítima defensa de su subsistencia por parte de los pequeños agricultores se encuentra mezclada con la codicia, la irresponsabilidad, la corrupción y la hipocresía de quienes saben muy bien los negocios que se traen entre manos, aunque los revistan con la noble bandera del patriotismo herido y airado.

Ya es hora de decir bien alto y bien claro —como ha hecho la Coordinadora “La Región de Murcia no se vende”— que estos supuestos patriotas murcianos están esquilmando el patrimonio natural y cultural de la Región y vendiéndolo sin el menor escrúpulo. Ya es hora de denunciar —como vienen haciendo desde hace años ANSE, Ecologistas en Acción, Greenpeace, el Foro Ciudadano y otras muchas asociaciones de la Región— el disparatado incremento de regadíos ilegales y de *resorts* con campos de golf (más de 50 ya proyectados, en una región con 45 municipios), que ha tenido lugar con la connivencia del gobierno regional, los ayuntamientos e incluso las comunidades de regantes.

Ya es hora de poner encima de la mesa el verdadero problema de esta Región: un incremento desmesurado e irresponsable de la demanda de agua, que se disparó por vez primera al socaire del trasvase Tajo-Segura —de modo que éste acabó siendo insuficiente antes de terminarse—, que volvió a acelerarse con el proyectado trasvase del Ebro —vendiendo así la piel del oso antes de cazarlo— y que pretende seguir incrementándose a costa del agotamiento de las reservas propias y de la reclamación de nuevos aportes externos, sin tener en cuenta los más elementales criterios de sostenibilidad y autosuficiencia, ni la Directiva Marco del Agua de la UE, ni el callejón sin salida al que lleva la llamada “guerra del agua”, ni los previsibles efectos del cambio climático en el litoral mediterráneo. Por cierto, los 400 científicos que cuantificaron recientemente dichos efectos fueron calificados como “palmeros” de la ministra Narbona por el preclaro señor Cerdá, durante muchos años consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, hasta que Medio Ambiente ha pasado a ser gestionado junto con Industria (¡olé la coherencia!) por otro preclaro político, el “ecologista” Marqués.

Ya es hora de que los ciudadanos de esta Región denunciemos las mentiras del nacionalismo hidráulico y reclamemos otro modelo de desarrollo —mucho más equitativo, sostenible y participativo— y otros representantes políticos que tengan la capacidad y la honestidad para hacerlo posible.

El “nacionalismo hidráulico” ha sido la columna vertebral en torno a la cual ha girado la estrategia del PP murciano en los últimos años. Su éxito principal ha consistido en controlar los principales recursos de poder de la Región y ponerlos al servicio de esta estrategia:

— En primer lugar, el poder institucional. El hecho de disponer de mayoría absoluta en la Asamblea Regional y en gran parte de los ayuntamientos, comenzando por Murcia y Cartagena, le ha permitido gobernar mediante un régimen de partido cuasi-único. No sólo ha dejado fuera de juego a los demás partidos, sino que también ha bloqueado cualquier mecanismo efectivo de participación ciudadana y ha pervertido el funcionamiento mismo de los órganos de control administrativos. En la Región de Murcia, para ser ciudadano de pleno derecho, hay que recitar a pies juntillas el “agua para todos”. En caso contrario, se corre el riesgo de ser estigmatizado y perseguido como un “antimurciano”. Los casos de acoso moral a los propios funcionarios de la administración pública son numerosos y algunos han sido denunciados ante los tribunales.

— En segundo lugar, el poder económico. Las principales organizaciones empresariales, financieras, comerciales y agrarias han participado activamente en la estrategia del nacionalismo hidráulico, promoviendo y financiando toda clase de iniciativas al respecto. Una vez más, la oligarquía económica murciana ha impuesto sus intereses particulares de casta como si fuesen los intereses generales de toda la ciudadanía. Esto ha sido especialmente efectivo en una región tradicionalmente caciquil, con tasas muy altas de precariedad laboral, que como es bien sabido favorecen el conformismo social y el clientelismo político.

— En tercer lugar, el poder mediático. El PP, con el apoyo del poder económico, ha ejercido un control casi absoluto de todos los medios de comunicación públicos (TVE, RNE y Onda Regional) y privados (incluidas las radios y televisiones locales “alegales”, a las que se otorgan subvenciones encubiertas y campañas publicitarias), con algunas pocas y honrosas excepciones. Esto ha sido muy efectivo en una región con unos índices muy bajos de lectura de prensa y de cultura política. Desde el 14-M, la pérdida del control sobre el Centro Territorial de RTVE ha llevado al PP a crear “su” propia TV autonómica pública, la 7, cuya gestión ha entregado a un consorcio de empresas constructoras. Al mismo tiempo, ha concedido los nuevos canales locales y regionales de TDT a empresas ideológicamente afines.

— En cuarto lugar, el poder cultural. El PP ha impulsado una recuperación del nacionalcatolicismo franquista, mediante la promoción y la subvención clientelar de todo tipo de actividades, asociaciones e instituciones confesionales: fiestas patronales, años jubilaires, cofradías procesionales, asociaciones neocatecumenales, religión en las escuelas, UCAM, etc. A esto hay que añadir una utilización hipócrita de los inmigrantes extracomunitarios: se los explota económicamente, se los segrega socialmente, se los excluye políticamente y, al mismo tiempo, se los convierte en chivo expiatorio de todos los males sociales: inseguridad ciudadana, insuficiencia de los servicios sociales, etc. Y esto se completa con una política educativa segregadora, que favorece a los centros concertados, para acoger en ellos a los hijos de las familias autóctonas acomodadas, y descuida a los centros públicos, donde se concentran los hijos de los inmigrantes y los alumnos pobres o con dificultades especiales.

La convergencia de estos cuatro tipos de poder en torno a la estrategia populista del nacionalismo hidráulico ha conseguido crear en la sociedad murciana una extensa y tupida red clientelar, que es la que ha dado al PP regional la base social de sus sucesivos triunfos electorales y le ha permitido llevar a cabo su insostenible e insolidario modelo de desarrollo.

2.3. La debilidad de la izquierda murciana

Ahora bien, ni la tradición caciquil heredada del pasado, ni la estrategia del nacionalismo hidráulico puesta en marcha por el PP desde 1995, son razones suficientes para explicar el profundo conservadurismo de la Región de Murcia y su situación de excepcionalidad política tras las elecciones generales del 14-M. Como señalaba el Foro Ciudadano en el citado documento *La situación política de la Región*, es necesario tener en cuenta un tercer tipo de causas, que tienen que ver con los errores que la izquierda murciana había acumulado en los años anteriores a 2004, y que le impidieron responder al discurso del nacionalismo hidráulico de una forma coherente, convincente y coordinada.

El primer error y la primera debilidad de la izquierda murciana han sido sus profundas divisiones internas, y por tanto su incapacidad para debatir entre sí y para actuar de forma mínimamente coordinada. La fragmentación de las opciones electorales de izquierda ha jugado siempre a favor del PP y le ha ayudado a consolidar su mayoría absoluta.

En primer lugar, tanto el PSRM-PSOE como IURM han tenido durante años serias dificultades para aceptar la pluralidad en su seno e integrar a las distintas corrientes en torno a un proyecto político común, un proyecto sustentado sobre los valores de la izquierda y el trabajo colectivo de los militantes más capacitados, y no sobre las ambiciones, enemistades y componendas personales entre tales o cuales facciones, dispuestas a patrimonializar el partido y actuar como una auténtica oligarquía organizativa.

En segundo lugar, ha habido durante años una profunda división entre el PSRM-PSOE e IURM, de la que han sido responsables ambos. Ha sido responsable el PSOE, por la política de prepotencia que practicó en el pasado, cuando gobernaba la Región con mayoría absoluta (de aquella época es heredera una ley electoral que ahora favorece al PP y que siempre ha castigado a IU, hasta el punto de reducir al mínimo su representación en la Asamblea Regional), una prepotencia que siguió demostrando después de 1995 en algunos ayuntamientos (es paradigmático el caso de Lorca, durante la larga etapa de Miguel Navarro), en contraste con la colaboración mantenida en otras comunidades (como Cataluña) y apoyada por el propio Zapatero tras el 14-M. Y ha sido responsable IU, por la política de la “pinza” que defendió en el pasado (a escala nacional y a escala municipal) y por el apoyo que Madrazo estuvo dando a la estrategia soberanista del nacionalismo vasco, mientras militantes y cargos electos del PSOE y del PP eran asesinados por ETA. A esto hay que añadir la división entre estos dos partidos y Los Verdes, de la que son responsables unos y otros: aquellos, por no tomarse suficientemente en serio el necesario giro ecológico de la izquierda (como hizo ICV en Cataluña y como hizo también el PSOE a escala nacional, al suscribir un pacto electoral con Los Verdes); y estos, por su oportunismo político (pues sólo aparecen en períodos electorales, no mantienen una línea electoral común con el resto de Los Verdes españoles, y ni siquiera se coordinan con los grupos ecologistas de la Región).

En tercer lugar, ha habido una clara división entre la izquierda política y la izquierda sindical, a la que hay que añadir la división en el seno de esta última. Los grandes sindicatos UGT y CCOO ya no son la “correa de transmisión” de los partidos de izquierda, pero esta autonomía sindical no les ha impedido mostrarse excesivamente complacientes con el PP (sobre todo en nuestra Región, como lo prueba el apoyo que prestaron a la cruzada por el trasvase del Ebro, hasta que el nuevo ciclo político iniciado tras el 14-M les ha obligado a distanciarse de ella). Esta excesiva complacencia con el PP ha generado fuertes tensiones internas, sobre todo en el seno de CCOO (donde los sectores críticos obtuvieron el 42% de los votos en su último congreso), y ha debilitado también la unidad de acción entre ambos sindicatos (así, CCOO ha firmado en la Región, junto con los sindicatos de derechas, el mal llamado Pacto Social por la Educación, mientras que UGT

y STERM-La Intersindical no lo han firmado). Además, tanto UGT como CCOO se han burocratizado en exceso (debido a las cuantiosas subvenciones públicas) y han mantenido sus cuotas de poder institucional a costa de ignorar y ningunear al resto de sindicatos de izquierdas.

En cuarto lugar, en una región donde el sector agro-pecuario tiene tanto peso económico y social, ha sido también importante la división existente entre las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se proclaman defensoras del medio ambiente, la solidaridad Norte-Sur y los inmigrantes extracomunitarios, y las organizaciones agrarias y ganaderas que se consideran progresistas, como COAG-IR y UPA, pero cuyas posiciones han chocado a menudo con las de los grupos ecologistas, las ONGs de ayuda al desarrollo y las asociaciones de defensa de los inmigrantes. La polémica por el trasvase del Ebro ha sido, una vez más, ilustrativa de esta división.

Por último, hay que destacar también la división entre la vieja izquierda política y sindical (sobre todo, la que cuenta con una mayor representación y unas mayores cuotas de poder: PSOE, CCOO y UGT) y la nueva izquierda social que ha venido surgiendo y movilizándose muy activamente en los últimos años, a través de distintas organizaciones y plataformas cívicas de base (los grupos ecologistas, pacifistas y feministas, la Comisión 8 de Marzo, la Plataforma por la Defensa del Litoral, la plataforma Desobedecer la Ley-Convivir sin Racismo, las ONGs de ayuda al desarrollo, el Foro Ciudadano, el Foro Social, etc.). Las viejas y burocratizadas organizaciones de la izquierda política y sindical murciana han tenido durante muchos años serias dificultades para acercarse a los nuevos movimientos sociales y establecer vías de colaboración con ellos, a pesar de que estos han abierto para la izquierda un nuevo ciclo histórico de luchas emancipadoras, una nueva forma de participación ciudadana y una nueva agenda de objetivos: profundización de la democracia, justicia global, pacificación y cooperación internacional, igualdad entre mujeres y hombres, ciudadanía cosmopolita, sostenibilidad ambiental, etc. A su vez, los nuevos movimientos sociales han tenido dificultades para reconocer que esa nueva agenda no puede llevarse adelante sin implicar en ella a las viejas organizaciones de la izquierda política y sindical, y también se han mostrado reacios a establecer vías de colaboración con ellas.

Sin embargo, las responsabilidades no se distribuyen por igual entre todos los sectores de la izquierda murciana, sino que son proporcionales al poder efectivo que ejerce cada uno de ellos. Por eso, el segundo gran error de la izquierda murciana se ha debido casi en exclusiva al PSOE, dado que ejerció el gobierno de la Región hasta 1995, es el principal partido de la oposición en la Asamblea Regional, sigue siendo el partido gobernante en varios municipios murcianos y recuperó el gobierno de España desde el pasado 14-M. Ante la política autoritaria, incompetente y corrupta practicada por el PP, en asuntos de tanta trascendencia como el urbanismo, la vivienda, el transporte, el medio ambiente, la gestión del agua, los regadíos ilegales, la precariedad laboral, la inmigración, la educación pública, las políticas de igualdad, etc., el PSOE murciano anterior al 14-M había sido incapaz de ejercer una oposición clara, firme y coherente, basada en un proyecto alternativo de desarrollo regional. Una vez más, la piedra de toque de esta incapacidad fue la cuestión del trasvase del Ebro: el PSRM-PSOE no supo elaborar un discurso alternativo, claro y rotundo, frente a la estrategia del nacionalismo hidráulico puesta en marcha por el PP. Y esta incapacidad se debía a varios motivos:

— La ausencia de un grupo dirigente que reuniera a las personas más capacitadas del partido, que tuviera firmes convicciones de izquierdas, que las defendiera públicamente con claridad y coherencia, y que conectara con los sectores más progresistas de la Región, como hizo Zapatero con el conjunto de la ciudadanía española. Era especialmente escandalosa la marginación que sufrían las mujeres en los órganos de dirección del PSRM-PSOE, a pesar de que algunas habían demostrado una gran valía, sobre todo en contraste con la política de paridad practicada por Zapatero en el gobierno de España.

— El retraso que sufría el PSOE regional con respecto a la renovación política (de personas, procedimientos y proyectos) experimentada por el PSOE nacional, en temas tan importantes como la “nueva cultura del agua” (y la consiguiente renuncia al trasvase del Ebro), la integración social de los inmigrantes (y la lucha contra el racismo), la igualdad entre mujeres y hombres (incluida la paridad en los cargos públicos), la regeneración democrática (y el fomento de la participación ciudadana), la promoción de viviendas sociales (y el freno a la fiebre urbano-turística), etc.

— La influencia que algunos alcaldes socialistas han ejercido en el PSOE regional, a pesar de mantener en sus ayuntamientos unas políticas que poco diferían de las del PP, en asuntos como el urbanismo, el medio ambiente, la inmigración, la participación ciudadana, la privatización de la gestión de servicios públicos básicos, etc. La connivencia con los constructores no es exclusiva del PP, sino que también la han practicado algunos alcaldes socialistas, como los “ex” de Los Alcázares y Lorca.

— La falta de conexión de los dirigentes regionales del PSOE con sus propios militantes y con el resto de los ciudadanos, especialmente con los sectores sociales más comprometidos de la izquierda social de la Región. De hecho, han sido las diferentes organizaciones y plataformas cívicas de la izquierda social (grupos ecologistas, plataformas de apoyo a los inmigrantes, foros sociales, etc.) las que han venido protagonizando en los últimos años la principal oposición a las políticas conservadoras del PP y a las políticas no muy diferentes de varios ayuntamientos del PSOE.

Todos estos errores, divisiones y debilidades del PSRM-PSOE y, en general, de la izquierda política, sindical y social murciana se pusieron de manifiesto en las dos convocatorias electorales de 2003 y 2004, y sin ellos no sería posible comprender el éxito propagandístico del nacionalismo hidráulico y el ascenso creciente de la hegemonía del PP murciano.

3. CAMBIOS EN LA SITUACIÓN POLÍTICA REGIONAL TRAS EL 14-M

En el apartado anterior hemos enumerado las tres grandes causas que explican los resultados electorales del 14-M en la Región de Murcia, unos resultados que fueron a contracorriente de los del resto de España y que revelaron la excepcionalidad política de esta comunidad autónoma.

Sin embargo, el cambio de ciclo político en España no ha dejado de producir sus efectos también en la Región de Murcia. A continuación, vamos a analizar los principales cambios que han tenido lugar en la situación política regional tras el 14-M.

3.1. La cohabitación y la crisis del nacionalismo hidráulico

En primer lugar, la excepcionalidad política de la Región de Murcia ha dado lugar a una situación institucional hasta ahora desconocida: por primera vez desde 1983, los murcianos no votan en su Región lo mismo que los españoles en el conjunto del Estado; por primera vez en más de veinte años, el Gobierno regional murciano y el Gobierno central son de diferente signo político, lo que ha obligado a una situación de “cohabitación”.

Esta cohabitación institucional ha supuesto un debilitamiento y una reducción del margen de maniobra del Gobierno de Valcárcel, dado que éste se encuentra ahora limitado por toda una serie de organismos ubicados en la Región pero dependientes del Gobierno de Zapatero: la Delegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Demarcación de Costas, el

Centro Territorial de RTVE, las grandes infraestructuras dependientes del Ministerio de Fomento, la Fiscalía del TSJ de Murcia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, etc.

La primera colisión, la más frontal y decisiva, se produce cuando el Gobierno de Zapatero, cumpliendo una promesa electoral, poco después de llegar a la Moncloa decide modificar el PHN y cancelar el proyectado trasvase Ebro-Segura, que había sido convertido por el Gobierno de Valcárcel en el buque insignia de toda su política regional, en la principal seña de identidad de la “murcianía”, en la bandera con la que tapar todas sus vergüenzas y en el látigo con el que fustigar a la oposición política, a los grupos ecologistas, a los expertos en política hidrológica, a los aragoneses, a los catalanes e incluso a los comisarios y funcionarios de la Unión Europea.

La decisión del Gobierno de Zapatero desata las furias del PP murciano, que en este asunto va de la mano con el PP valenciano. La estrategia del nacionalismo hidráulico y la campaña del “agua para todos” llega a su apogeo en esta confrontación con el nuevo Gobierno central, pero también comienza a desinflarse. El proyectado trasvase del Ebro deja paso al programa AGUA, puesto en marcha por la nueva ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con una importante dotación presupuestaria. Este programa está centrado en el ahorro, la reutilización, los bancos de agua y, sobre todo, la construcción de desaladoras. En el debate sobre el agua comienzan a darse cuatro importantes desplazamientos:

— En primer lugar, la polémica sobre la política de trasvases entre cuencas se desplaza ahora al trasvase Tajo-Segura, cuya continuidad es cuestionada por la comunidad de Castilla-La Mancha, y no solo por su Gobierno regional, que es del PSOE, sino también por la oposición del PP. Así que el PP, que en la legislatura anterior había presumido de tener un discurso único en toda España, frente a los discursos contrapuestos del PSOE, adopta ahora posiciones también contrapuestas en las distintas comunidades autónomas. La posición de Castilla-La Mancha se basa en dos argumentos principales: por un lado, el descenso de las reservas en la cabecera del Tajo, que está causado por el actual periodo de sequía, pero que muy probablemente sea la regla en el futuro, pues diversos estudios demuestran que el cambio climático ya está haciendo descender la pluviosidad en todo el levante español y se calcula que este descenso puede llegar a ser del 20% en los próximos años; por otro lado, la demanda creciente de agua por parte de los castellano-manchegos y el derroche que promueve o consiente el Gobierno regional murciano mediante los regadíos ilegales, los *resorts* para segundas residencias y los campos de golf.

— En segundo lugar, todas las comunidades afectadas por posibles trasvases, sea como donadoras o como receptoras de caudales, tratan de impedirlos o garantizarlos por la vía de la reforma de sus respectivos estatutos autonómicos, lo cual ha obligado al Gobierno de Zapatero a recordar que la competencia última sobre las aguas es del Estado, y al mismo tiempo ha revelado no solo la incapacidad de las citadas comunidades para llegar a acuerdos razonables y duraderos entre ellas, sino también la facilidad con que el discurso del nacionalismo hidráulico se replica a sí mismo, como un clon, y es susceptible de ser utilizado demagógicamente por todos los gobiernos autónomos. De modo que la estrategia del PP murciano, basada en el victimismo y en la confrontación permanente con otras comunidades autónomas (Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha) se ha vuelto como un *boomerang* contra la Región de Murcia; es cierto que esa estrategia le ha dado muchos votos al PP regional, pero ha sido a costa de sacrificar los intereses generales de la Región.

— En tercer lugar, el debate sobre los trasvases está siendo reemplazado o complementado por el debate sobre la desalación. La primera reacción del Gobierno de Valcárcel consistió en rechazar la desalación como alternativa al trasvase del Ebro y en poner todo tipo de obstáculos al programa AGUA, pero las desaladoras han comenzado a construirse y a funcionar con una gran eficiencia. Además, algunas son promovidas por los propios agricultores y constructores, a cuyos

intereses dice servir el PP. Así que el Gobierno de Valcárcel, para que no se le desinfle del todo lo del “agua para todos”, decide crear el Ente Regional del Agua como una operación nuevamente propagandística: dice que es para construir sus propias desaladoras y “no depender de Madrid”, porque el Gobierno de Zapatero “quiere frenar el desarrollo de la Región”, pero lo cierto es que la propiedad de todas las aguas es pública y su concesión depende de la Confederación Hidrográfica del Segura, es decir, del Gobierno central.

— En cuarto lugar, el Gobierno regional del PP ya no oculta que su sed de agua es, en realidad, “sed de golf” (título de un documental emitido por TVE dentro del programa Línea 900, y que suscitó las furias del PP murciano), tal y como han venido denunciando desde hace años los grupos ecologistas. En efecto, el Gobierno de Valcárcel confiesa abiertamente que sus proyectadas desaladoras no están destinadas a la agricultura sino al gran negocio inmobiliario, centrado en la construcción masiva de segundas residencias para extranjeros europeos: las llamadas macroubanizaciones o *resorts* con campos de golf adosados. El discurso del nacionalismo hidráulico, que había servido para engañar, instrumentalizar y movilizar a los agricultores (y, en general, a una población murciana que ya no es mayoritariamente agrícola, pero que conserva todavía la memoria de un largo pasado rural), deja ver por fin cuáles eran sus verdaderos objetivos: obtener nuevos recursos hídricos externos, financiados por España y la Unión Europea, para garantizar el gran negocio de la especulación inmobiliaria.

3.2. La bomba inmobiliaria y la corrupción organizada

En efecto, otro cambio importante tiene lugar en la situación política regional durante los años 2005 y 2006: el debate sobre el agua comienza a transformarse en el debate sobre el ladrillo. La demanda imperiosa de agua ya no se vincula tanto a la agricultura como al desarrollo urbano-turístico.

El nacionalismo hidráulico es sostenido cada vez más abiertamente por la patronal de los constructores y promotores inmobiliarios, que acapara la representación de todo el empresariado murciano. Los pequeños y medianos agricultores comienzan a descubrir que lo importante para el Gobierno regional y para la mayoría de los Ayuntamientos ya no es preservar la viabilidad de los regadíos, sino convertirlos en solares urbanizables. El presidente de la Junta de Hacendados de Murcia, Sigifredo Hernández, declara a EFE el 7 de febrero de 2006 que “el ladrillo se traga cada año 1.500 tahúllas” de huerta (1.677.000 metros cuadrados) y destruye cauces milenarios de riego tradicional. Los pequeños agricultores comprueban que se está acabando con la agricultura murciana, tanto la de riego tradicional como la del trasvase del Tajo, al recalificar millones de metros de regadío para convertirlos en solares edificables. Para eso se quería el agua del Ebro. Para eso se engañó y utilizó a los agricultores de buena fe.

Se multiplican las iniciativas de promoción urbanística por parte del Gobierno regional (Ley del Suelo, Directrices del Litoral, etc.) y por parte de los Ayuntamientos (planes generales y convenios urbanísticos). Toda la Región comienza a ser recalificada, comprada y vendida como un inmenso solar, y de este proceso no se libran las zonas agrícolas, ni los espacios naturales, ni los terrenos de dominio público, ni los monumentos históricos y arqueológicos. Esta bomba inmobiliaria estalla de una forma tan brutal que suscita un movimiento de rechazo por parte de sectores cada vez más amplios de la ciudadanía. En la primavera de 2005, nace un nuevo movimiento social: la Coordinadora “La Región de Murcia no se vende”, que agrupa a decenas de asociaciones ciudadanas, vecinales, juveniles, culturales y ecologistas de toda la Región. La consigna del “agua para todos” comienza a ser denunciada cada vez más abiertamente como “agua para golfos” y acaba siendo respondida por la consigna “Murcia no se vende”.

El debate político se centra cada vez más en un modelo de desarrollo basado en el cemento y el ladrillo (por su insostenibilidad económica, social y medioambiental), en la falta de participación ciudadana a la hora de tomar decisiones estratégicas, en la multiplicación de casos de corrupción política y en el proceso de “marbellización” de la vida pública murciana.

Este debate sobre la bomba inmobiliaria ha trascendido ampliamente las fronteras de la Región y ha atraído la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales: *El País*, *Interviú*, *El Jueves*, TVE, TV3, La 4, Tele 5, Antena 3, *Liberation*, *L'Express*, *Le Monde*, *The Washington Post*, la BBC y otras televisiones de Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Finlandia y Japón. Todos estos medios se han interesado por algunos casos especialmente emblemáticos, como la desprotección de la Marina de Cope, la construcción de la autopista Cartagena-Vera, la saturación del Mar Menor, los proyectos para el Valle de Ricote o la polémica creada en Alhama de Murcia en torno a la macrourbanización de Polaris World, con el voto contrario de la concejala disidente del PP y las amenazas públicas de uno de los empresarios de Polaris al secretario general del PSOE murciano.

Son varias las razones por las que la Región de Murcia ha comenzado a suscitar el interés de los medios de comunicación nacionales e internacionales:

— En primer lugar, porque el fenómeno de la especulación inmobiliaria se ha extendido rápidamente por varias comunidades autónomas españolas, sobre todo las de Madrid, Baleares, Canarias, Valencia, Murcia y Andalucía, y ha puesto de manifiesto que una gran parte del crecimiento económico del PIB español se debe al excesivo peso del sector de la construcción (tanto en vivienda como en obra pública), basado en un empleo precario, poco cualificado y bajo en productividad, lo cual preocupa a muchos expertos económicos y a los bancos centrales español y europeo.

— En segundo lugar, porque este fenómeno no es solo español sino también mundial, y está estrechamente ligado a la globalización de los mercados financieros, el capital especulativo, el crimen organizado y el dinero negro. El dinero procedente de las operaciones especulativas, la evasión fiscal y las actividades criminales circula cada vez más fácilmente en un circuito que conecta las bolsas internacionales, los paraísos fiscales, las entidades financieras y las inversiones inmobiliarias. Sobre esta dimensión global de la especulación inmobiliaria, es muy recomendable el reciente libro de Ramón Fernández Durán: *El tsunami urbanizador español y mundial*.

— En tercer lugar, porque la especulación inmobiliaria está teniendo efectos devastadores en el entorno físico y en el tejido social: la ordenación del territorio, las infraestructuras de transporte, los gases de efectos invernadero, los espacios naturales, las formas de vida urbana, los servicios públicos, el equilibrio entre los diversos sectores productivos, el precio de la vivienda, las hipotecas de las familias, la emancipación de los jóvenes, las condiciones de empleo, la honestidad de los cargos públicos y la corrupción política de las instituciones democráticas. Todo esto ha dado origen a un nuevo movimiento ciudadano de ámbito local, regional, nacional y europeo, que se dedica específicamente a denunciar los abusos urbanísticos ante la opinión pública, ante los tribunales de justicia, ante el gobierno central y ante las instituciones de la Unión Europea.

— En cuarto lugar, porque se trata de un tipo de urbanismo no compacto sino disperso, y no destinado a las necesidades básicas de la población autóctona (como lo prueba el brutal crecimiento del precio de la vivienda y la escasez de viviendas de promoción pública y de protección oficial), sino más bien a la inversión especulativa y a segundas residencias para clientes extranjeros de un nivel adquisitivo medio y alto: es el llamado “turismo residencial” de las macrourbanizaciones con campos de golf. Así que el mercado de este tipo de urbanismo es internacional, y los posibles clientes de otros países están muy interesados en informarse al respecto.

— En quinto lugar, porque la extensión y gravedad del fenómeno de la especulación inmobiliaria, y de la corrupción política a ella asociada, ha obligado al Gobierno central a tomar cartas en el asunto. Por un lado, se está elaborando una nueva Ley del Suelo de ámbito estatal que reemplazará a la que promovió el PP en 1998 y que permitió “liberalizar” el mercado del suelo. Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente está poniendo freno a determinadas operaciones promovidas por ayuntamientos y gobiernos autonómicos, sea porque invaden el dominio público costero (como el caso de Puerto Mayor, en La Manga) o algún espacio natural protegido (como el caso de La Cerrichera), sea porque no tienen asegurado el suministro de agua (que a partir de ahora deberá ser acreditado por las Confederaciones Hidrográficas). Por último, las unidades de investigación policial, fiscal y judicial han sido reorganizadas y reforzadas para hacer frente al creciente número de delitos relacionados con el urbanismo, el medio ambiente, el crimen organizado, el blanqueo de dinero y la corrupción política. En el caso de Murcia, hay que destacar el nombramiento en 2005 de un nuevo Fiscal Jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal (quien en su primer año ha abierto ya numerosas diligencias informativas que afectan a varios ayuntamientos) y el nombramiento en 2006 de José María Alcázar como fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción en el TSJ de Murcia.

— En sexto lugar, porque la Operación Ballena Blanca en 2005 y la Operación Malaya en 2006 han puesto al descubierto la corrupción generalizada del Ayuntamiento de Marbella, lo que ha llevado, por vez primera en la democracia española, a la suspensión del gobierno municipal y al nombramiento de una comisión gestora por parte del Gobierno central. Este caso, además, tiene varias ramificaciones en otras ciudades y comunidades españolas, entre ellas la Región de Murcia, de la que es originario el cerebro de la trama marbellí. De hecho, la Operación Malaya sigue abierta todavía, y en el momento en que escribimos estas líneas está tratando de investigar las conexiones de la trama en Murcia, Valencia y Madrid. Esta investigación puede permitir que se conozcan en profundidad muchos de los casos de corrupción que actualmente se encuentran en los medios de comunicación regionales y en la Fiscalía del TSJ de Murcia: Lo Poyo, La Cerrichera, Joven Futura, Nueva Condomina, los *resorts* del Campo de Murcia y tantos otros. La Fiscalía del TSJ de Murcia tiene abiertos expedientes que afectan ya a una decena de Ayuntamientos: Murcia, Cartagena, Águilas, Mazarrón, Los Alcázares, La Unión, San Javier, San Pedro del Pinatar, Cieza... Por todo ello, el caso de Marbella se ha convertido en el paradigma de los estrechos vínculos que unen a la especulación inmobiliaria y la corrupción política.

Todo esto ha hecho que la política del PP murciano esté cada vez más cuestionada. No solo porque el debate sobre el agua ha sido reemplazado por el debate sobre la especulación inmobiliaria y la corrupción política, sino porque este último ha trascendido las fronteras regionales y ha convertido a la Región de Murcia (junto con la comunidad valenciana) en uno de los ejemplos más escandalosos del proceso de “marbellización” de la vida pública, no ya a escala municipal sino a escala autonómica.

La reacción del Gobierno de Valcárcel y de sus socios más próximos, que ahora son casi en exclusiva los empresarios, especuladores y financieros vinculados al sector de la construcción, ha sido la siguiente:

— Por un lado, han acusado a la oposición política, a las asociaciones ciudadanas y a los medios de comunicación nacionales e internacionales, por dar una “mala imagen” de la Región y perjudicar el negocio inmobiliario, que según ellos coincide con el “interés general” de todos los murcianos. Por eso, han organizado varias campañas de publicidad con un enorme coste para la hacienda pública y varios viajes al extranjero por parte del propio Valcárcel, que está actuando de forma cada vez más descarada como representante comercial del sector inmobiliario.

— Por otro lado, han incitado al arrogante Marqués, que parecía un posible sucesor de Valcárcel, para que deje la Consejería de Industria y Medio Ambiente tras el escándalo de La Cerrichera (denunciado ante la Fiscalía), y en su lugar han nombrado a Mercader, para que dé una imagen más ambientalista y, sobre todo, para que ponga en hibernación temporal el caso Cerrichera y otros escándalos urbanísticos que pueden pasar factura electoral al PP, hasta que pasen los comicios de 2007. A esto hay que añadir la decisión de Valcárcel de suspender el turbio proyecto de Lo Poyo. Pero estas operaciones de imagen sirven de muy poca cosa, porque la política del ladrillo sigue su curso, porque los ayuntamientos siguen aprobando convenios urbanísticos con miles y miles de viviendas, porque varios cargos políticos siguen pasando de la administración a las empresas inmobiliarias y viceversa, y porque las denuncias ante la Fiscalía siguen aumentando.

— En tercer lugar, han evitado abrir el debate público y la negociación política sobre la Reforma del Estatuto de Autonomía, como ya se está haciendo en la mayor parte de las comunidades autónomas españolas, comenzando por las de nuestro entorno más próximo: Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha. Es cierto que se ha creado una Comisión de Estudio en la Asamblea Regional, pero el PP no tiene previsto abrir negociación política alguna hasta la próxima legislatura. La razón es doble: por un lado, el PP regional quiere seguir actuando como partido cuasi-único y ninguneando por todos los medios posibles a los partidos de la oposición, a pesar de que éstos representan al 40% de los murcianos; por otro lado, un debate abierto y una negociación política de este tipo le obligaría a pactar con ellos acuerdos de gran calado sobre el modelo de desarrollo regional, sobre la planificación y ordenación del territorio, sobre el control democrático de las instituciones, sobre los cauces de participación ciudadana, sobre la carta de derechos de la ciudadanía, etc. En resumen, abrir ahora el debate sobre la Reforma del Estatuto supondría darle cancha a la oposición política y social, y podría poner en peligro la mayoría absoluta del PP a poco menos de un año para las elecciones autonómicas y municipales de 2007. El Foro Ciudadano publicó, el 2 de julio de 2005, unas *Propuestas para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia*, que pueden consultarse en: www.forociudadano.org/documentos/informes/reforma_estatuto.htm

— Por último, el PP y el lobby del ladrillo han tratado de asegurarse a cualquier precio el control de los medios de comunicación regionales. Al control que ya ejercían sobre la mayor parte de los medios escritos y audiovisuales, han venido a sumarse los nuevos periódicos gratuitos y los nuevos canales de Televisión Digital Terrestre (TDT). A fines de 2005, aprovechando las vacaciones navideñas, el Gobierno regional concedió todos los canales privados de TDT, tanto locales como regionales, a empresas ideológicamente afines y a un consorcio de constructores creado al efecto. Al mismo tiempo, creó un canal público autonómico de TV y adjudicó su gestión por siete años a ese mismo consorcio de constructores, sin experiencia alguna en el sector de la comunicación, y con un coste para la hacienda pública mucho mayor que el ofrecido por otros concursantes con reconocida experiencia en el mundo audiovisual (cuando las políticas sociales del Gobierno regional se caracterizan por sus bajas dotaciones presupuestarias, en comparación con otras comunidades españolas).

Estas escandalosas concesiones de la nueva TDT son una prueba más de la connivencia a la que se ha llegado entre el Gobierno regional murciano y el lobby del ladrillo. Tras haber perdido el control del Centro Territorial de RTVE, Valcárcel crea un canal autonómico de TV (la 7) y se lo cede a los constructores, porque necesita tener su propio altavoz de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2007. Esta nueva cacicada se ha visto agravada por el hecho de que el Gobierno de Zapatero ha decidido reducir al mínimo la actividad de los centros territoriales de RTVE.

Como respuesta a las concesiones de las TDT, a las que el grupo PRISA aspiró sin éxito alguno, la cadena SER decidió poner fin a los dos años de luna de miel que había mantenido con el PP murciano (entre 2003 y 2005), e inició una ofensiva informativa en la que comenzó a desvelar los trapos sucios de la corrupción organizada, muchos de ellos conocidos desde hacía tiempo. Además, han comenzado a surgir o a consolidarse nuevos medios alternativos, casi todos ellos digitales (economiavanzada, vegamediapress, enciezadigital, azogue, elecolo, etc.) y en general vinculados al movimiento ciudadano. Estos medios suelen informar sobre las numerosas denuncias de abusos urbanísticos y corruptelas políticas.

El 11 de mayo de 2006, varios miembros del Foro Ciudadano publicamos en el diario *La Verdad* un artículo titulado “La corrupción organizada”, que reproduzco a continuación:

La ciudad de Marbella ha estado sometida durante quince años a un régimen de corrupción organizada en el que han participado los sucesivos alcaldes y numerosos concejales, funcionarios, abogados, jueces, empresarios, periodistas, etc. El cerebro de toda esta trama era un individuo de origen murciano que carecía de escrúpulos para hacer dinero y de gusto para gastarlo, y que mantenía en nuestra Región su principal refugio y algunas de sus muchas operaciones inmobiliarias.

Lo más grave es que los ediles de Marbella, a pesar de todas las denuncias que pesaban sobre ellos, tanto de particulares como de la Junta de Andalucía, fueron refrendados en cuatro elecciones sucesivas, y que los gobiernos autonómico y estatal no han intervenido de manera resolutive hasta que, tras la caída de Aznar y el reforzamiento de la lucha contra la corrupción organizada, ha podido llevarse a cabo la Operación Malaya, precedida en 2005 por la Operación Ballena Blanca. El caso de Marbella ha desvelado el déficit de la democracia española, especialmente acusado en el ámbito municipal: no sólo han fallado los controles del Estado de Derecho, sino también el civismo democrático de los marbellíes, que una y otra vez han convalidado con su voto un régimen corrupto y mafioso.

Marbella es un caso extremo, pero no es un caso aislado, sino más bien una señal de alarma, la punta delata de un iceberg inmenso. Lo ocurrido en esa ciudad ha puesto al descubierto hasta dónde puede llegar el proceso de marbellización que está teniendo lugar en otros muchos municipios de España, sean del signo político que sean. El problema es especialmente grave en las autonomías gobernadas por el PP, dada su deliberada política de mercantilización del suelo y privatización de las plusvalías: Madrid, Baleares, Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

En todas estas comunidades se repite la misma pauta: un crecimiento brutal e insostenible del suelo urbanizado y de la actividad constructora, tanto en vivienda como en obra pública. Este tipo de crecimiento contraviene los “principios de política social y económica” que la Constitución exige a los poderes públicos: la protección del medio ambiente (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), y el derecho de todos a una vivienda digna, mediante una ordenación pública del suelo que evite la especulación y haga revertir sobre la comunidad las plusvalías generadas por la actividad urbanística (art. 47).

Muchos municipios y algunas comunidades están haciendo exactamente lo contrario de lo que dice la Constitución: un urbanismo salvaje que fomenta la especulación, privatiza las plusvalías, dispara los precios de la vivienda hasta hacerla inaccesible a los más necesitados (jóvenes, mujeres e inmigrantes), atenta contra el patrimonio histórico, saquea los espacios y recursos naturales, altera irreversiblemente el paisaje

y degrada la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, hasta el punto de destruir su identidad y su tradicional atractivo turístico y cultural como legado viviente de la milenaria civilización mediterránea.

¿Cómo es posible que se esté llevando a cabo semejante expolio, a una escala sin precedentes en la historia de nuestra democracia? La razón es muy sencilla: en los últimos diez años, y sobre todo tras la Ley del Suelo promovida por el gobierno Aznar en 1998 (de la que derivan leyes como la madrileña, la segunda ley valenciana y la murciana), se ha establecido una alianza estratégica entre tres agentes sociales que son los nuevos terratenientes de España, pues se han adueñado de una gran parte del territorio, de muchos gobiernos municipales y de algunos autonómicos.

Por un lado, están los capitales especulativos que llegan al sector de la construcción procedentes de otros sectores económicos, de la evasión fiscal y de las redes internacionales de delincuencia organizada que trafican con armas, drogas y personas. Por otro lado, están las entidades financieras, incluidas las cajas de ahorro (destinadas por ley a fines sociales), que tienen sucursales en paraísos fiscales, blanquean el dinero negro mediante créditos a los promotores y participan en el negocio inmobiliario a través de las hipotecas. Y, por último, están los políticos corruptos, cuya función consiste en desactivar todos los controles legales y administrativos de las instituciones que gobiernan, presionar a los técnicos y órganos asesores de la administración para que avalen sus decisiones, comprar con dinero público a toda clase de personas, organizaciones y medios de comunicación, y, por último, engañar a la ciudadanía con mentiras tales como que el urbanismo salvaje es la única opción posible y va a redundar en beneficio de todos. A cambio, estos políticos obtienen un pago en metálico o en obra construida para sí mismos, para su partido y para algunas vistosas actuaciones públicas que les garanticen la reelección.

No es de extrañar que haya surgido un nuevo movimiento ciudadano dispuesto a denunciar la gravedad del problema ante las instituciones españolas y europeas. El 1 de abril se constituyó en Murcia la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT), una federación estatal que agrupa a cientos de asociaciones y plataformas de toda España (entre ellas, la Coordinadora “La Región de Murcia no se vende”, que ha convocado una manifestación para el 3 de junio). El urbanismo salvaje se ha convertido en el problema social más grave de España, como han señalado también el sociólogo Enrique Gil Calvo (*El mal de Marbella*, El País, 24-4-06) y los más de cien profesionales que han suscrito el *Manifiesto por una nueva cultura del territorio*. Por eso, la CCDT reclama toda una serie de medidas urgentes para hacerle frente (www.nosevende.org).

En la Región de Murcia, los nuevos terratenientes del ladrillo y el hormigón no sólo están provocando el expolio de nuestro patrimonio natural e histórico, sino que están sometiendo a las instituciones democráticas a una estrategia de corrupción organizada que carece de precedentes en la historia de nuestra democracia. Los once años del gobierno Valcárcel han estado dedicados a poner todos los recursos de la administración pública al servicio de los intereses especulativos del sector inmobiliario, que a su vez se ha convertido en el principal sustento del PP.

Basta recordar la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral, el expolio de los recursos hídricos disfrazado de nacionalismo hidráulico mediante la incesante reclamación de nuevos trasvases, los numerosos proyectos urbanísticos que afectan a espacios protegidos o de dominio público, el brutal encarecimiento de la vivienda, una precariedad laboral que rebasa el 40%, una tasa de abandono escolar que supera el 30%

y es la más alta de España, una inversión en políticas sociales que está por debajo de la media española, un control político de los medios de comunicación que ha llegado al colmo con la concesión de las TDT, un acoso constante a los funcionarios que no se pliegan a la corrupción organizada, un uso discrecional de los fondos públicos para someter a la ciudadanía a un régimen de poder clientelar, y, por último, una connivencia de intereses cada vez más estrecha entre ciertos grupos inmobiliarios y ciertos miembros de la cúpula regional del PP.

En esta Región se está llegando a unos niveles de corrupción que no difieren de los del GIL marbellí. Aquí, los corruptos no dimiten ni son cesados, sino que acosan a los funcionarios honestos, insultan a los medios independientes, descalifican a los partidos de oposición, ignoran a las asociaciones ciudadanas que denuncian sus tropelías y engañan a la opinión pública con la quimera del oro inmobiliario.

Si Murcia no quiere seguir la deriva de Marbella, debe emprender cuanto antes una profunda regeneración democrática de sus instituciones, sus cargos públicos y sus valores cívicos. El ciclo político de Valcárcel debe llegar a su fin. Ha comenzado la cuenta atrás: en el plazo de un año, habrá elecciones autonómicas y municipales. Esperemos que los murcianos no cometan el mismo error que cometieron los marbellíes al avalar con su voto la corrupción organizada. Si el PP obtuviera de nuevo mayoría absoluta, la marbellización de la Región se habría consumado.

Desde el Foro Ciudadano, hacemos un llamamiento a todas las instituciones y organizaciones sociales de la Región, comenzando por el PSRM-PSOE (cuya ejecutiva ha dado pasos en la dirección adecuada, pero aún no ha conseguido controlar y regenerar a sus propios ayuntamientos) y siguiendo por IURM, los sindicatos, las organizaciones agrarias, las asociaciones ciudadanas, los colegios profesionales, el empresariado honesto e innovador, los tribunales, las universidades, los medios de comunicación, etc., para que asuman su responsabilidad cívica y promuevan de forma activa la regeneración democrática que la Región de Murcia necesita.

3.3. Cambios en la izquierda política y social

En los dos últimos años, coincidiendo con el cambio de ciclo político en España, la nueva situación de cohabitación entre Madrid y Murcia, la crisis del nacionalismo hidráulico y la irrupción del debate sobre la bomba inmobiliaria y la corrupción política, se han producido también algunos cambios relevantes en la oposición política y social.

En primer lugar, se ha producido una renovación en las cúpulas tanto del PSRM-PSOE como de IURM, que han pasado a dirigir Pedro Saura (profesor de Economía de la UMU y diputado en el Congreso) y José Antonio Pujante (profesor de Filosofía en enseñanza secundaria y concejal de Lorca), respectivamente. Esta renovación se ha hecho en sintonía con las direcciones nacionales de ambos partidos (Zapatero y Llamazares), y se ha caracterizado por el rejuvenecimiento de los respectivos grupos dirigentes, la incorporación de varias mujeres a puestos relevantes y un estilo de hacer política mucho más cercano a los problemas y exigencias de la ciudadanía. El cambio de personas y de estilo ha sido especialmente notorio en el PSRM-PSOE, dada la lamentable situación en la que se encontraba este partido en los meses posteriores al 14-M. A juzgar por el breve tiempo transcurrido, parece que se ha abierto un período nuevo, en el que la oposición al Gobierno de Valcárcel actúa de una forma más clara y decidida, con un mayor grado de entendimiento mutuo y con un mayor acercamiento a las organizaciones ciudadanas y a los nuevos movimientos sociales.

No obstante, ambos partidos siguen teniendo dificultades para ganarse el apoyo de los ciudadanos. El PSRM-PSOE tiene todavía importantes contradicciones internas, provocadas sobre todo por la vieja guardia, que tras ser apartada del núcleo dirigente se ha hecho fuerte en los ayuntamientos donde gobierna (Lorca, Los Alcázares, La Unión, Jumilla, etc.) y cuyas políticas urbanísticas no difieren apenas de las del PP. Es cierto que Saura ha conseguido la dimisión de los dos alcaldes más polémicos, Escudero (Los Alcázares) y Navarro (Lorca), pero los ayuntamientos socialistas necesitan una renovación mucho más profunda y generalizada. Y la ejecutiva regional tiene que presentar un programa alternativo de gobierno para esta Región, un programa sólido y creíble, que desmonte definitivamente todas las mentiras del nacionalismo hidráulico y ofrezca a la ciudadanía un verdadero modelo de desarrollo sostenible y solidario.

En cuanto a IURM, ha perdido mucho terreno en la Asamblea y en los ayuntamientos, por lo que ha de hacer un gran esfuerzo para remontar su situación, sobre todo ante la posibilidad de que el voto verde, por un lado, y el voto útil, por el otro, puedan volver a restarle apoyos y agravar aún más los efectos perversos de la ley electoral regional. Por eso, es importante que IURM llegue a un acuerdo electoral con LVRM, y que PSRM-PSOE e IURM-LVRM se reconozcan mutuamente como aliados estratégicos si quieren derrotar al PP y colaborar en un futuro gobierno de coalición.

En los dos sindicatos con mayor representación, CCOO y UGT, no se ha producido una renovación significativa. En una Región que mantiene las peores condiciones laborales (en salarios, temporalidad, irregularidad, siniestralidad, baja cualificación, discriminación por sexo, edad y origen nacional, etc.) y las más deficientes políticas sociales de España (en vivienda, educación, sanidad, asistencia social, situación de la mujer, conciliación de la vida laboral y familiar, etc), lo menos que puede decirse es que CCOO y UGT han venido manteniendo una estrategia poco crítica y reivindicativa, tanto hacia el gobierno regional del PP como hacia la patronal CROEM. Al contrario, estos dos sindicatos han estado más preocupados de llegar a acuerdos con el Gobierno de Valcárcel y la patronal dirigida por Del Toro, que de establecer alianzas estratégicas con la izquierda política, con el resto de sindicatos de izquierda y con los nuevos movimientos sociales.

Así lo prueba el apoyo dado en el pasado a la campaña del “agua para todos”, de la que solo se distanciaron tras la llegada al poder de Zapatero y la derogación del trasvase del Ebro. Así lo prueba el reciente Pacto por la Educación, aunque en este caso la Federación de Enseñanza de UGT, a pesar de las presiones de su ejecutiva regional, no se ha sumado a la firma de CCOO y los demás sindicatos de derechas. Así lo prueba la firma de un nuevo Pacto por el Empleo (a pesar de la poca efectividad del anterior), cuyo resultado más tangible e inmediato es la recepción de cuantiosas subvenciones públicas por parte de la patronal y los dos sindicatos firmantes. Y así lo prueba, en fin, la participación de ambos sindicatos en esa operación de propaganda política y mediática que es el Horizonte 2010, un conjunto de “planes estratégicos” que el Gobierno de Valcárcel dice haber consensuado con la “sociedad murciana”, cuando su verdadera estrategia (que es servir al lobby del ladrillo) se está haciendo de espaldas a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

En contraste con esta voluntad de firmar toda clase de acuerdos con el gobierno regional y la patronal, son muy preocupantes las reticencias que muestran CCOO y UGT para colaborar tanto con la izquierda política como con la izquierda social y el movimiento ciudadano, en cualquier tipo de reivindicación social que se plantee frente a las políticas del PP murciano. Es cierto que, tras la llegada de Zapatero al poder, han mostrado una mayor distancia hacia el Gobierno de Valcárcel, pero siempre de una manera muy comedida y ambigua, evitando tejer una verdadera alianza con el resto de organizaciones sociales, sindicales y políticas de la izquierda murciana. Su pretendido esfuerzo de despolitización y autonomización de la actividad sindical se ha traducido,

en la práctica, en una muy preocupante dependencia del partido político actualmente gobernante en la Región.

Algo parecido podría decirse de organizaciones agrarias como la COAG-IR y la UPA: han sido excesivamente seguidistas del PP y la CROEM en su estrategia de nacionalismo hidráulico, y muy poco críticas con el expolio de los recursos hídricos, la falta de apoyo público a la comercialización de los productos agropecuarios murcianos (frente a las exportaciones de terceros países y las prácticas abusivas de las grandes cadenas de distribución), la recalificación masiva del suelo rural y el negocio especulativo del urbanismo salvaje. Parece que, en los dos últimos años, están comenzando a darse cuenta de que el interés del PP y de la CROEM no está en la agricultura, sino en el ladrillo. Y eso ha hecho que comiencen a tender puentes con las organizaciones sociales que vienen denunciando la mentira del “agua para todos” y las graves consecuencias del *tsunami* inmobiliario. Pero todavía no se han atrevido a cuestionar abiertamente la estrategia del nacionalismo hidráulico, que tantos votos ha dado al PP, tantos pelotazos urbanísticos ha regalado a la patronal del ladrillo y tanto daño ha causado a la sostenibilidad de los recursos hídricos, los regadíos tradicionales, los cultivos de secano y los espacios naturales.

Donde ha habido mayores novedades ha sido en el campo de los nuevos movimientos sociales. Además de las organizaciones ciudadanas que ya venían actuando anteriormente (ecologistas, vecinos, jóvenes, mujeres, ONGs de apoyo a los inmigrantes y de ayuda a los países empobrecidos, etc.), han surgido nuevas asociaciones, plataformas y coordinadoras vinculadas a la nueva coyuntura política.

Sin duda alguna, la novedad más importante ha sido la aparición de la Coordinadora “La Región de Murcia no se vende”, surgida en la primavera de 2005 y en la que ya se han integrado más de cincuenta asociaciones de toda la Región. La Coordinadora LRMNSV ha sido el aglutinante del amplio movimiento ciudadano que se ha levantado contra los abusos urbanísticos y medioambientales, las agresiones al patrimonio histórico y cultural, y las diversas irregularidades administrativas y corruptelas políticas asociadas al negocio de la especulación inmobiliaria. En su corta existencia, esta Coordinadora ha organizado numerosas actividades (manifestaciones, caravanas, conciertos, jornadas de debate, etc.), ha atraído la atención de los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, y ha colocado en el centro del debate político el lema “Murcia no se vende”.

Este lema no solo ha reemplazado al “agua para todos” del PP, sino que muchas asociaciones locales, en la Región de Murcia y en otras comunidades autónomas españolas, creadas para denunciar y combatir el *tsunami* inmobiliario, han adoptado la coletilla “...no se vende”. Además, esta Coordinadora regional ha sido una de las organizaciones que más activamente ha impulsado la coordinación estatal entre todos los colectivos ciudadanos que luchan en España contra los abusos urbanísticos, e incluso ha actuado como primera anfitriona de este movimiento, pues fue precisamente en Murcia donde se constituyó, el 1 de abril de 2006, la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT), una federación estatal que agrupa a cientos de asociaciones y plataformas de toda España. Por eso, el nombre de la página web de la CCDT es: nosevende.org

Paralelamente, en la primavera de 2006 se constituyó la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular para la Protección de los Espacios Naturales de la Región de Murcia. El objetivo era acogerse a este mecanismo de participación ciudadana directa, para presentar en la Asamblea Regional una Proposición de Ley con un solo artículo, en el que se establece la derogación de la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo regional (por la que se desprotegeron 15.000 has. de espacios naturales, como Marina de Cope y El Valle-Carrascoy), así como todas las disposiciones derivadas de ella (como las Directrices del Litoral). La ILP disponía de seis meses de plazo para recabar un mínimo de 10.000 firmas, en hojas autorizadas y supervisadas por la

Junta Electoral regional. Finalmente, tras organizar numerosos actos de información y recogida de firmas por toda la Región (con el apoyo de varias organizaciones políticas y sociales, como IURM, Ecologistas en Acción, ANSE, el Foro Ciudadano y la Coordinadora LRMNSV), la Comisión Promotora ha presentado 14.700 firmas. Ahora, les toca a los partidos debatir en la Asamblea esta proposición presentada directamente por la ciudadanía murciana. Para más información, puede consultarse: salvarespaciosnaturalesmurcia.com

Por último, en febrero de 2006, se constituyó en Murcia la Plataforma Ciudadana por la Democracia Informativa, promovida por el Foro Ciudadano, y en la que se integraron la Asociación de Periodistas y Editores Independientes, varias federaciones de asociaciones de vecinos, la federación de asociaciones de padres y madres de alumnos, el Foro Social, la Coordinadora LRMNSV, la Comisión 8 de Marzo, ACSUR-Las Segovias, la Oficina Verde de la UMU, la UPA, CGT, STERM-La Intersindical, UGT, CCOO, Juventudes Comunistas, Juventudes Socialistas, IURM y PSRM-PSOE. En resumen, una serie de organizaciones sociales, sindicales y políticas que representan a sectores muy amplios y muy diversos de la sociedad murciana. Y todas estas organizaciones decidieron unir sus voces para denunciar la falta de un derecho fundamental amparado por la Constitución española: el pluralismo informativo y el libre acceso de todas las personas y organizaciones ciudadanas a los medios de comunicación, un pluralismo y una libertad de acceso que deben estar garantizados por los poderes públicos. En la Región de Murcia, en cambio, el Gobierno de Valcárcel ha pretendido controlar todos los medios, tanto públicos como privados, restringir al máximo el pluralismo informativo e impedir el libre acceso a las personas y organizaciones que no comulgen con el discurso oficial.

Esta política de mordaza informativa llegó al colmo con las concesiones de los nuevos canales de TDT, entregados por Valcárcel a un consorcio de constructores y a las empresas ideológicamente afines. El escándalo fue tan mayúsculo que dio origen a la Plataforma Ciudadana por la Democracia Informativa. Esta Plataforma organizó varios debates públicos sobre la situación de los medios en la Región, se personó para solicitar los expedientes de las TDT (que le fueron denegados) y pretende seguir luchando por la creación de mecanismos legales e institucionales que garanticen el pluralismo informativo y el control democrático (no gubernativo ni sectario) de los medios de comunicación locales y regionales.

La Región de Murcia necesita una profunda regeneración democrática, que solo podrá llevarse a cabo si en las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2007 se produce un cambio de ciclo político y nuestra comunidad autónoma comienza a acompañarse con la mayoría del país. Pero para que eso ocurra, debe implicarse toda la sociedad civil murciana: no solo los partidos de la oposición, los sindicatos, las organizaciones agrarias y las asociaciones ciudadanas, sino también los colegios profesionales, el empresariado honesto e innovador, los tribunales de justicia, las universidades, los medios de comunicación, etc.

En este punto, hemos de mencionar la admirable labor que viene realizando el Colegio de Arquitectos de Murcia, en defensa de un urbanismo sostenible, solidario y participativo, proyectado al servicio de la ciudadanía por profesionales cualificados y honestos. Su denuncia de los profesionales corruptos, su organización de debates públicos sobre los problemas y alternativas del urbanismo del siglo XXI, y su convocatoria de un concurso de ideas para el Barrio de la Paz, de Murcia, es un ejemplo de responsabilidad cívica. Si todas las instituciones de la Región asumiesen la parte de responsabilidad cívica que les corresponde, el proceso de marbellización que está sufriendo la vida pública murciana podría comenzar a revertirse en un proceso de democratización política, económica, social y cultural.

4. CONCLUSIONES

En resumen, el nuevo contexto político de la Región de Murcia, tras las elecciones autonómicas y municipales de 2003, y las generales de 2004, está marcado por los siguientes acontecimientos:

— La Región de Murcia ha pasado a convertirse en la comunidad políticamente más conservadora de España, a contracorriente del cambio de ciclo político que se ha producido en el resto del país, y esto gracias al éxito obtenido por el PP de Valcárcel con su invento del nacionalismo hidráulico.

— El cambio de ciclo político en España y la sustitución del proyectado trasvase del Ebro por el programa AGUA ha hecho que se desinfle la estrategia del nacionalismo hidráulico y que disminuya el margen de maniobra del Gobierno de Valcárcel, debido a su cohabitación con el Gobierno de Zapatero. Esta cohabitación está poniendo de manifiesto, además, el contraste entre las políticas sociales y de derechos civiles de Zapatero, y el neocaciquismo clientelar y ultraconservador de Valcárcel.

— En esta nueva situación de cohabitación, la estrategia del Gobierno de Valcárcel consiste en alimentar el discurso victimista del nacionalismo hidráulico y del desarrollismo sin límites, mediante una constante confrontación con el Gobierno de Madrid, porque de ese modo espera seguir obteniendo réditos electorales y mantenerse en el poder. El interés de la Región, en el tema del agua y en otros muchos temas, está en establecer relaciones de colaboración con el Gobierno central y las comunidades vecinas (Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia), sean del signo político que sean, pero el PP regional y sus socios del ladrillo han supeditado el interés general de la Región a sus intereses particulares, que consisten en seguir monopolizando el poder y expoliando a esta tierra y a sus gentes.

— Por eso, en los dos últimos años, el debate político y social ya no está centrado en el “agua para todos” sino en el “Murcia no se vende”, es decir, en el carácter insostenible e insolidario del actual modelo de desarrollo, basado en el urbanismo salvaje, el expolio de los recursos naturales y culturales, la precarización de las condiciones laborales y sociales, y la corrupción política organizada.

— Coincidiendo con el cambio de ciclo político en España y el nuevo debate sobre el modelo de desarrollo, se ha producido una renovación de la oposición política (PSRM-PSOE e IURM), que todavía debe profundizarse. Asimismo, ha surgido un nuevo y poderoso movimiento ciudadano, cristalizado en torno a la Coordinadora “La Región de Murcia no se vende”. Pero se echa en falta una mayor implicación de los grandes sindicatos, las organizaciones agrarias y otras entidades de la Región, como las universidades, los colegios profesionales y los medios de comunicación, en el proceso de regeneración democrática que necesita la sociedad murciana.

Terminaré con unas palabras del citado artículo “La corrupción organizada”: “Si Murcia no quiere seguir la deriva de Marbella, debe emprender cuanto antes una profunda regeneración democrática de sus instituciones, sus cargos públicos y sus valores cívicos. El ciclo político de Valcárcel debe llegar a su fin. Ha comenzado la cuenta atrás: en el plazo de un año, habrá elecciones autonómicas y municipales. Esperemos que los murcianos no cometan el mismo error que cometieron los marbellies al avalar con su voto la corrupción organizada. Si el PP obtuviera de nuevo mayoría absoluta, la marbellización de la Región se habría consumado”.

Los autores y autoras del informe

ALARCÓN GARCÍA, Mariano
Profesor de Máquinas y Motores Térmicos, Universidad de Murcia

BALIBREA GALLEGO, Francisco
Catedrático de Matemáticas, Universidad de Murcia

BAÑOS GONZÁLEZ, Isabel
Licenciada en Ciencias Ambientales

BAÑOS PÁEZ, Pedro
Profesor de Sociología, Universidad de Murcia

BARAZA, Francisca
Bióloga y experta en gestión de espacios naturales y agua

BERMEJO, Luis A.
Economista

CAMPILLO, Antonio
Catedrático de Filosofía, Universidad de Murcia

COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Grupo de trabajo del Foro Ciudadano

COMISIÓN 8 DE MARZO
Plataforma feminista de la Región de Murcia

DE SANTIAGO RESTOY, Caridad
Doctora en Historia del Arte

ESTEVE SELMA, Miguel Ángel
Profesor de Ecología, Universidad de Murcia

FERNÁNDEZ TRUJILLO, Juan Pablo
Profesor Titular de Tecnología de Alimentos, Universidad Politécnica de Cartagena

GIMÉNEZ CASALDUERO, María
Jurista especialista en medio ambiente

HERNÁNDEZ FRANCO, José
Catedrático de Enseñanza Secundaria

HERNÁNDEZ PÉREZ, Patricio
Lic. en Historia, Técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Cartagena

IRACHETA, Carlos Felipe
Arquitecto y Urbanista

JARAUTA, Francisco
Catedrático de Filosofía, Universidad de Murcia

LARIO, Manolo
Filólogo y miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APDH)

LOSA CARMONA, Antonio
Profesor de Economía, Universidad de Murcia

MARSET CAMPOS, Pedro
Catedrático de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina, Universidad de Murcia

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Julia
Investigadora en Ecología, Universidad de Murcia

NAVARRO CARRETERO, Gabriel
Licenciado en Psicología, Técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Murcia

PEDREÑO, Andrés
Profesor Titular de Sociología, Universidad de Murcia

PÉREZ MUÑOZ, Manuel
Economista

PÉREZ PICAZO, María Teresa
Catedrática Emérita de Historia e Instituciones Económicas, Universidad de Murcia

POVEDA, Miguel
Sociólogo y Ergónomo

REVERTE, Francisco Manuel
Licenciado en Derecho, Técnico de Juventud en el Ayuntamiento de Murcia

RUIZ ESTEBAN, Cecilia
Profesora Titular de Psicología, Universidad de Murcia

RUIZ LIGERO, Rodolfo
Realizador de TVE, miembro de la Plataforma Ciudadana por la Democracia Informativa

SALINAS GARCÍA, Teresa
Profesora de Enseñanza Secundaria

TORRES, Francisco
Profesor de Sociología, Universidad de Murcia

TOVAR ARCE, Manuel
Profesor de Economía, Universidad de Murcia.

URRALBURU ARZA, Óscar
Profesor de Enseñanza Secundaria, Responsable de Acción Sindical de STERM-Enseñanza

VICENTE GIMÉNEZ, Teresa
Profesora Titular E.U. de Filosofía del Derecho, Universidad de Murcia

VIDAL COY, José Luis
Periodista del diario *La Verdad* y profesor en la Facultad de Comunicación y Documentación,
Universidad de Murcia

